

El Salvador: Violencia, Seguridad Pública y Militarización

Por Rudis Yilmar Flores Hernández¹

1. Política, Guerra y Militarización (1980)

Centroamérica se caracteriza en su devenir histórico como una región que enfrenta conflictos y crisis profundas, marcadas por los procesos de acumulación capitalistas fundamentados en la explotación y disociación de los productores directos de las fuerzas productivas como la tierra. En este pasado histórico encontramos los procesos de militarización y de guerras vinculados a la hegemonía de las instituciones castrenses que imponían su poder mediante la represión a través de medios coercitivos.

En la región dada la transición cualitativa de la militarización y su escalón superior que es la guerra, se observó un crecimiento inusitado de efectivos de las Fuerzas Armadas de los distintos países, la presencia y el incremento de los medios de guerra. El primer elemento a considerar es el aumento de efectivos regulares de los ejércitos de 1977 a 1985, en el primer año de (1977), ubica el preámbulo de las primeras insurrecciones populares en Nicaragua; en 1980, el momento en que el gobierno sandinista se comienza a percibir como enemigo por parte de sus vecinos y 1985 da cuenta de las dimensiones del incremento y de sus posibles proyecciones. Otro elemento que destaca es el incremento cualitativo de los medios de guerra, al respecto son evidentes dos tendencias una en Guatemala, El Salvador y Honduras y de manera notoria para fortalecer la fuerza aérea; la segunda se observa en Nicaragua y El Salvador, de contar con medios de infantería bastante desarrollados, estos dos aspectos aparecen en los años de 1980 y 1981 (Benítez Manaut, 1989: 365).

Al referirnos a la historia salvadoreña está plagada de acontecimientos económicos, políticos, sociales. El militarismo jugó un papel trascendental, la dictadura militar como forma de Estado, se fundamentó desde 1931 en una alianza entre una fracción ultraderechista de las Fuerzas Armadas y la Oligarquía. En el transcurso de más de medio siglo esta alianza produjo cerca de 150 mil víctimas como producto de la violencia armada directa y cientos de miles a causa del hambre y las enfermedades; sufrió altibajos provocados por la lucha popular como factor determinante y como consecuencia, por la emergencia coyuntural de otra fracción de las clases dominantes y grupos de militares democráticos que intentaron desplazar a la fracción de la oligarquía que detentaba la hegemonía, pero sin poder cambiar el carácter oligárquico del régimen.²

La participación directa de los militares en el ejercicio del poder, transito a lo largo de la historia contemporánea por diferentes etapas. La última que corresponde al ocaso de la contrainsurgencia que se caracterizaba como la fase de la corrupción política y moral de los altos mandos, que en el soporte de la ayuda norteamericana durante los años de la guerra civil en El Salvador se enriquecieron y consolidaron la posición que los situaba por encima del gobierno; las leyes y el juicio de la sociedad para conformar un poder paralelo.

¹ Sociólogo y Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, San Miguel, Fundador y Director de la Revista Conjeturas Sociológicas, Miembro del Equipo Editorial de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). E-Mail del contacto: ryflores.ues@gmail.com.

² Puede verse aquí el Boletín Venceremos, Documento de la Resistencia Salvadoreña editado en 1986: Los Sectores Populares, tienen su opción, la opción de la Democracia, por el fin del militarismo, la opción Popular Democrática y Revolucionaria.



La guerra civil se inició en la segunda mitad del siglo XX, en enero de 1981 cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional emprendió una ofensiva general contra la dictadura militar y el régimen oligarca. Las condiciones políticas y económicas del país propiciaron un proceso de acumulación de fuerzas revolucionarias, políticas y militares durante la década de los 70s y 80s que permitió el surgimiento de las cinco organizaciones que pasarían a conformar el FMLN, generando un proceso de guerra de guerrillas y generalizando la lucha de la ciudad al campo³.

En la década de los 80s la guerra de guerrillas se expandió por todas las ciudades y la acompañaba el movimiento de masas con capacidad de librar las batallas en las fábricas, las calles, barrios y colonias permitiendo cualificar la lucha revolucionaria. Así se alcanzó un equilibrio militar, que políticamente significó la existencia de un doble poder, convenciendo a los norteamericanos de la necesidad de negociar el conflicto ante la incapacidad de Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), de derrotar militarmente a un ejército guerrillero de tres mil combatientes.

La prolongación del conflicto armado y la intervención directa de los Estados Unidos en la conducción de la guerra nos dan un balance militar no sólo en El Salvador sino en toda Centroamérica, generando un proceso cuantitativo de militarización. Para el caso del país pasó de tener 7130 efectivos militares en 1977 a 51150 en 1985. Guatemala, Honduras y Nicaragua crecieron sustancialmente ya sea por los conflictos internos o en el caso de Nicaragua por la guerra contrarrevolucionaria financiada por la administración Reagan.

La injerencia directa en el conflicto no sólo pasó por el financiamiento sino por la formación acelerada de batallones elites en los centros de entrenamiento interno, la Escuela de las Américas y en el comando sur de Panamá, surgiendo las unidades especializadas como los batallones Atlacatl, Atonal, batallón Arce y Ramón Belloso. El primero de ellos apareció para 1981 conducido por el coronel Domingo Monterrosa Barrios⁴, responsable directo de la masacre de más de mil campesinos en el Mozote, departamento de Morazán -entre ellos más de cuatrocientos niños y niñas que presentaban impactos de bala acorta distancia como lo estableció el informe de la comisión de la verdad, desvirtuando la versión oficial que establecía que los campesinos eran guerrilleros que murieron producto de los operativos militares- (Nievas, Heinrich y Salazar Pérez, 2014).

El triunfo de la revolución sandinista provocó una escalada contrarrevolucionaria de los norteamericanos en la región centroamericana, modificando el modelo de dictadura sostenidas durante las últimas décadas de los años 80 a partir de un errado concepto de seguridad nacional, pretendiendo evitar una victoria revolucionaria, modernizando la dictadura con una fachada civil.

El Salvador se convirtió así en un nuevo modelo de dictadura contrarrevolucionaria con enmascaramiento político muy complejo y sofisticado: paso a ser el plan piloto de la

³ El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se conformó de cinco estructuras político militares; El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), El Partido Comunista Salvadoreño (PCS), Las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y El Partido de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

⁴ Domingo Monterrosa Barrios, representó durante los primeros años de guerra la punta de lanza del plan de guerra de baja intensidad de los gringos, responsable directo de muchas masacres, según el informe de la comisión de la verdad que investigó crímenes después de finalizado el conflicto armado. Murió en octubre de 1983 en una emboscada planeada por el comandante Guerrillero Joaquín Villalobos, al entregarle un viejo transmisor de la radio guerrillera cargado con explosivos, explotando en su helicóptero donde murieron otros miembros del alto mando del ejército.



estrategia de guerra de baja intensidad, que combinó tres elementos: la ejecución de un genocidio (50 mil muertos y un millón de desplazados entre 1980 y 1981) como factor de contención del movimiento revolucionario; segundo, el escalamiento militar de la guerra, asumiendo Estados Unidos el control total del Ejército Salvadoreño; y una fachada civil para el gobierno, es decir, discurso demagógico, reformas e intentos de reformas, para ganar al pueblo que estaba masacrando. El punto de partida de este nuevo modelo fue el pacto entre el partido Demócrata Cristiano y el ejército patrocinado por EEUU. El presidente José Napoleón Duarte y los demócratas cristianos se comprometieron a dar mano libre al ejército y garantizar que la matanza no solo no fuera obstáculo para continuar con la ayuda externa si no que tendía a mejorarse y el gobierno no se vería aislado completamente.⁵

En una acción simultánea, los gringos escalaban la guerra e intervenían en el país; los militares ejecutaban el genocidio y Duarte confundía al mundo. La dictadura militar de nuevo tipo se ponía en marcha: gobierno civil de fachada, sin ningún poder real, el poder en manos de los militares y la soberanía en manos de los norteamericanos que bajo el esquema de guerra de baja intensidad legitimaban el modelo de reformas, procesos electorales viciados, nueva constitución y el juego político limitado. Todo esto para darle cobertura al contenido esencial a su plan que fue la acción contrarrevolucionaria justificada en el marco de la supuesta seguridad de los EEUU y poder salvar a su principal aliado la oligarquía terrateniente.

El escalamiento de la confrontación armada se convirtió en una alternativa para la política exterior de los gringos. En términos tecnológicos, en El Salvador se utilizó toda la tecnología militar y el armamento que poseían los norteamericanos en ese momento para guerras irregulares, ya que por la dimensión de la guerra les resultaba difícil la aplicación de armamento convencional de mayor poder destructivo. Los mismos asesores reconocen en su momento que haber dotado al ejército de armamento aéreo generó un nivel de dependencia, acomodamiento y debilidad de las Fuerzas Armadas. Se manejó armamento de infantería más avanzado para guerras irregulares, los aviones cazabombarderos más modernos y apropiados, los helicópteros de transporte y apoyo de combate, los sistemas de comunicación y radio rastreo más sofisticados existentes en Centroamérica, piezas de artillería con el alcance y volumen de fuego adecuado a la dimensión del territorio y teatro de operaciones. Con este nivel de equipos militares los EEUU provocaron más de 70 mil muertos al finalizar la guerra civil, cien mil desaparecidos y un millón de desplazados.⁶

En todo este escenario la administración Reagan a partir de la estrategia de guerra de baja intensidad, busco legitimar su modelo para darle cobertura al contenido esencial de su plan contrarrevolucionario, argumentado en el interés externo de la supuesta seguridad para los EE.UU. y respaldando a la oligarquía terrateniente.

En este marco, si comparamos las dictaduras tradicionales anteriores con el significado del modelo contrainsurgente a partir del pacto Partido Demócrata Cristiano (PDC)- Ejército, para 1980 durante el gobierno de Duarte fueron asesinados más salvadoreños que en dictaduras anteriores, se produjo el mayor nivel de empobrecimiento de las masas, una corrupción sin precedentes superando los registros de dictaduras anteriores y se perdió totalmente la soberanía asumiendo el país una dependencia política-militar (Nievas, Heinrich y Salazar Pérez, 2014: 80).

5 Puede verse en el Documento de la Resistencia Salvadoreña, de circulación interna, 1987, "Insurrección Popular: Deseo o Realidad de la Lucha Social".

6 Ver Documento de la Resistencia Salvadoreña.



En este contexto se produce una escalada de la lucha popular, provocando nuevos escenarios de represión. Diariamente son asesinados muchos salvadoreños en la ciudad y el campo, se producen matanzas y las movilizaciones de trabajadores son ametralladas y surge la necesidad de incrementarla. Así se pasa de un concepto de guerra total en un enfrentamiento a la totalidad en los distintos campos de la sociedad, abanderando el genocidio.

Durante la década de los años de 1980 se generalizaron los crímenes perpetuados por los escuadrones de la muerte. Se trataba de estructuras clandestinas de represión, cuyo accionar consistía en el secuestro, tortura y ejecución de sus víctimas. Los escuadrones de la muerte funcionaron en casi todas las unidades militares de la época a través de las secciones de inteligencia; pero se estructuraron en combinación con grupos civiles o fueron impulsados exclusivamente por civiles de poder económico bajo la tolerancia y conveniencia del Estado.

2. Tendencia de la Violencia en la Pos-Guerra

La criminalidad que vive El Salvador revela una grave crisis, descomposición social a la que la llevaron las administraciones de gobiernos de derecha desde 1989. Al realizar una reestructuración que posicionaba a los empresarios en la política de amoldar el Estado a sus intereses con la creación de un marco jurídico y político que les permitía estar exentos de impuestos y de manejar todas las instituciones públicas, se comenzó a crear una alianza estratégica con los empresarios de los medios de comunicación, el capital financiero y empresarios ligados a negocios internacionales. La intención fue crear un dominio, ideológico, cultural y político de proporciones hegemónicas que pudieran hacer desaparecer toda reacción de oposición al Modelo Neoliberal, criminalizar las protestas y los movimientos sociales.

El debate de la transición de posguerra en El Salvador continúa abierto, veintitrés años de iniciado este proceso. Uno de los aspectos cruciales de la discusión es la dimensión democrática de esta transición, en todo caso se pensó que, si se daba esta transición, esta debía ser necesariamente democrática, pero la realidad demostró que no se trataba de algo mecánico que nos conduciría a un régimen de estas dimensiones.

Un elemento clave en la discusión y en el discurso sigue siendo que los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto armado, generando cambios en las viejas estructuras del Estado y creando nuevas instituciones. Ejemplo de ello fue la desaparición de los cuerpos represivos de seguridad como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, los batallones de reacción inmediata, la reducción del ejército, la creación de una nueva doctrina militar y surgieron la Nueva Policía Nacional Civil, El Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, el Foro Económico Social que en los sucesivos gobiernos de derecha lo desaparecieron y un elemento importante fue la conversión del ejército guerrillero en una institución política que ganó las elecciones presidenciales en marzo del 2009.

El tema de la seguridad pública en El Salvador sigue manteniendo al igual que años anteriores mucha connotación y relevancia en los medios de comunicación. Principalmente porque ahora se trata de ver como los gobiernos de izquierda enfrentan el fenómeno delincencial que se traduce en una herencia del pasado y de una deuda pendiente de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador y que no resolvieron los problemas estructurales que lo generaron, como la exclusión social, la pobreza etc.



Los datos en materia de seguridad pública con relación a la disminución de la violencia en El Salvador son poco alentadores en relación a años anteriores gobernados por ARENA el partido de derecha. La realidad es que el país lleva más de 20 años de no salir del pantano de la criminalidad. Estadísticas nacionales e internacionales lo ubican entre los más peligrosos, violentos y criminales del mundo; incluso, se compara y llega a superar a naciones en conflictos bélicos como el caso de Irak o Afganistán.

De acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal (IML) de 2009, El Salvador, que vive un proceso inconcluso de democratización, tenía una tasa de homicidios de 76.2 por cada 100000 habitantes (2009), mientras que Irak, que para ese mismo periodo que vivía un conflicto armado producto de la invasión de Estados Unidos y es considerado el país más violento del mundo, tenía una tasa de asesinatos de 89 por cada 100000 habitantes (promedio entre 2003 y 2009). Pese a esta realidad Irak reflejaba para entonces una disminución en los homicidios durante el 2010 según datos de la ONG Body Count (IBC) que reportaba 3976 civiles muertos en episodios violentos.

Según el estudio “Mapa de la Violencia: Los jóvenes de América Latina” publicado en el 2008 por la Red Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), detalla que este país de Centroamérica ocupa el primer lugar de homicidios de jóvenes a nivel latinoamericano.

El Salvador tiene una tasa de homicidio de jóvenes de 92.3 por cada 100000, muy superior a la mayoría de países latinoamericanos. Pero también no sólo es el más violento de América Latina y está entre los países más violentos del mundo, sino que también lidera la tasa de feminicidios o asesinatos de mujeres a nivel mundial.

De acuerdo al informe de Estado de la Población mundial 2010, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) estimaba que el país tenía una tasa de feminicidios 129,46 por millón de mujeres, lo que otorga el deshonroso primer lugar a nivel mundial. La violencia no sólo es grave por el número de muertes que ocurren cada día o el número de delitos que se registran diariamente, si no por las manifestaciones que adopta y que afecta a la población. Lo observamos claramente en los reconocimientos de Medicina Legal que evidencian cada vez más los cadáveres con señales de torturas.

Esta criminalidad que vive El Salvador revela una grave crisis, una descomposición social desde las administraciones del partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la implementación del Modelo Neoliberal desde 1989, que condujeron a profundizar los niveles de pobreza.

Si recorremos rápidamente los últimos nueve años existe un crecimiento permanente de los niveles de criminalidad según el IML. Es así que, para el año del 2007, se registraron 3497 homicidios, en el 2008, existe una leve disminución ya que se reportan 3179, en el 2009 el número de homicidios fue 4382, cifra que preocupó a las autoridades policiales ya que, desde la firma de los acuerdos de paz, en enero de 1992, la cifra de homicidios nunca había sido tan elevada.

La violencia se recrudece cada día y en los últimos cuatro años las estadísticas de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Medicina Legal, consideran que existe un elevado e incontrolable índice de delincuencia, a pesar de los planes mano dura y súper mano dura implementados por el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) Y Antonio Saca (2004-2009) y el endurecimiento de las leyes no han tenido éxito.



Las políticas de “manos duras” sirvieron únicamente para elevar los niveles de impunidad, hicieron más compleja y profesional a las pandillas. Es decir antes de entrar en vigencia dichos planes no se perfilaban como estructuras delincuenciales armadas y organizadas y vinculadas al narcotráfico. Las pandillas se fortalecen y se institucionalizan en el marco de las políticas de seguridad.

A corto plazo no se vislumbra que la violencia se resuelva si se sigue concibiendo que esta es un problema de seguridad y se olvidan los grandes problemas estructurales que ampliaron la brecha entre ricos y pobres, que propiciaron una guerra de doce años, que obligaron a tantos salvadoreños a emigrar a distintas partes del mundo. Mientras las políticas públicas no estén enfocadas desde una generación de derechos y se siga enfocando la violencia desde un enfoque de seguridad, las autoridades de seguridad pública seguirán pensando en más policías, cárceles y más endurecimiento de las leyes lo cual las convertirá en un fracaso.

Actualmente El Salvador supera a países como México (que enfrenta una guerra con grupos de narcotraficantes) y Colombia (que vive un conflicto bélico) en el número de homicidios.

Si bien las autoridades de Seguridad Pública sostienen que existe una baja en los homicidios con respecto al 2009, durante el 2010 se registraron diversos hechos violentos que sorprendieron a la comunidad nacional como internacional. El más significativo es el registrado el 20 de junio de 2010, donde miembros de la pandilla 18 interceptaron un bus de la ruta 47 y lo incendiaron con los pasajeros a bordo, muriendo calcinadas 17 personas. Ese año cerró con 4004 homicidios.

En la gestión de Funes se implementaron una serie de planes que no terminaron de ser medidas de carácter paliativas. En el 2010 el Ministro de Justicia Manuel Melgar reconoció la gravedad de la situación delincencial, sin embargo sostenía que para el 2011 podría haber una reversión con la implementación de nuevos planes, cosa que la sociedad no termina de digerir.

Durante el 2010 se implementó La Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que se fundamenta en cinco ejes. El control de la Represión de delito es el primero y que involucra la Fiscalía, la Procuraduría General con sus defensores públicos, La Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y el sistema judicial en su conjunto. Esta estrategia se complementaría con el control del territorio a partir de tres acciones: crecimiento policial, 2500 nuevos policías, el apoyo de la Fuerza Armada que consistió en el despliegue de más de 12000 efectivos militares desempeñando tareas de Seguridad Pública, incluyendo el control de los centros penales con el objetivo de contrarrestar toda red delincencial que funciona con la complicidad de los custodios de centros penales. También se estableció la aplicación del régimen de disponibilidad consistente en la ampliación de la jornada laboral de los policías.

Estos planes terminarían de configurarse en 2011, mientras que se estipulaban establecer lazos entre las instituciones que tienen que ver con la seguridad local y con otras policías de la región centroamericana y con organismos de Estados Unidos con quien se firmó un convenio para la instalación del Centro de Escuchas Telefónicas.

Es fundamental entender en esta coyuntura por dónde se orientaba el plan de seguridad, aun cuando comparamos el 2009 con el 2010, las autoridades mostraban un nivel de satisfacción con la reducción de un 9% en la tasa de homicidios. Más allá de este porcentaje el país continuó teniendo un espiral de violencia dinamizado por el accionar



del narcotráfico y las narco pandillas, que cada día perfeccionan las más atroces formas de asesinatos, extorciones, consumo y venta de drogas.

El comienzo del 2011 no terminó de ser alentador ya que el mes de enero cerró con un total de 346 muertes violentas, 44 menos que el mes de diciembre del 2010. Sin embargo el gobierno anunció nuevos planes como la implementación de un nuevo sistema 911 para atender emergencias, integrar un call center, nuevas instalaciones, más equipo y una nueva flota vehicular. Además se ejecutó el plan de video-vigilancia en las principales zonas de la capital, se creó un nuevo sistema de recepción de denuncias y observatorios de conducta policial, se instalaron cámaras en los centros penales y se bloqueó teléfonos celulares. Sin embargo se produce un repunte en relación al 2010 ya que se contabilizan 4360 homicidios.

Es relevante precisar que el presidente Funes establece una serie de atribuciones a la Fuerza Armada que evidencian la militarización de la seguridad pública y violenta el espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992. Dichas atribuciones son: habilitar la incorporación de mayor número de elementos; operar con fuerzas de tarea, realizar registros o requisas a personas y vehículos y apoyar en los dispositivos de control territorial; detener en casos de flagrancia y entregar a los detenidos de inmediato a la PNC, mediante informe circunstanciado de los hechos; resguardar la frontera nacional en lugares identificados como no habilitados, con la finalidad de prevenir el tráfico o trasiego ilegal de bienes y personas; reforzar la seguridad perimetral externa en los centros penitenciarios, intermedios e internamiento de menores; así como en cualquier otro tipo de centro de detención, a requerimiento de la autoridad competente; brindar apoyo terrestre, marítimo y aéreo, poniendo a disposición equipo y personal calificado.

Después de dieciocho meses de gobierno de Mauricio Funes se continuó con una visión de atacar el problema de seguridad, mientras la población sigue pagando un alto costo en vidas humanas y experimentando las condiciones que incrementan los niveles de pobreza, se sigue sin encontrar una salida integral a dicho problema (Quintanilla, 2010).

Durante el año 2012 se produce un fenómeno muy cuestionado que es la tregua entre pandillas. El gobierno se desligó de responsabilidades sobre dicha tregua, pero curiosamente los asesinatos sufren una reducción significativa comparada con años anteriores, ya que se registraron 2641. El sistema carcelario otorgó privilegios a jefes de pandillas que se encontraban en una cárcel de máxima seguridad, entre ellos moviéndolos a cárceles de menos seguridad.

En los dos años sub siguientes de Funes la realidad de la violencia tomó auge en el 2013, con 2499 asesinatos y en 2014, con 3942. Las medidas implementadas, incluyendo un amplio despliegue de militares en tareas de seguridad pública, fracasaron. El Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, en las Elecciones Presidenciales del 2014, vuelve a ganar el control del ejecutivo a través de su candidato Salvador Sánchez Cerén, quien en un año anuncia una serie de medidas para combatir los niveles de criminalidad, entre ellas la creación de Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por diversas fuerzas sociales, policiales y la Iglesia Católica, el traslado inmediato de los máximos líderes de las pandillas beneficiados por la tregua al penal de máxima seguridad, la Ley contra el Delito de Extorción, la aprobación de la Ley de Extinción y domino, la implementación de la policía comunitaria.

Al asumir la presidencia nuevamente un gobierno del FMLN desde el 2014, se anuncian nuevas estrategias de seguridad. El presidente Sánchez Cerén advirtió la



necesidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades mediante la otorgación de recursos y mejorar la capacidad de acción de la Policía Nacional Civil y de las Fuerza Armada.

El primer semestre del 2015 es poco alentador. Se registraron aquí los meses más violentos del periodo de post-guerra. De enero a junio se contabilizaron 2865 asesinatos, situación que nos muestra los niveles de criminalidad y la poca efectividad de las medidas. En esta realidad las pandillas profundizan su accionar delincencial y comienza una guerra abierta que tiene como objetivos a los miembros de los cuerpos de seguridad y los efectivos militares que forman parte del plan de seguridad (que durante el año fueron asesinados 85 policías).

Al cerrar el 2015 se registra el año más sangriento de toda la historia del El Salvador con una tasa de homicidios de 6670, que equivalen a un record histórico de 104 homicidios por cada 100,000 habitantes convirtiéndose en el país más violento del continente americano y el año más violento después de finalizada la guerra civil en el país.

A partir del mes de abril del 2016, el gobierno de Sánchez Ceren, propone al Congreso salvadoreño un pliego de medidas extraordinarias encaminadas a fortalecer el Plan El Salvador Seguro. Entre estas medidas esta contemplar un mayor control de los centros penitenciarios desde donde se ordenan el cometimiento de delitos, así como también incrementar el número de policías en los territorios considerados de alta peligrosidad, desplegar el mayor número de efectivos de la Fuerza Armada en todo el territorio para garantizar mayor tranquilidad.⁷

Frente a este panorama es importante señalar que muchos planes y programas son ejecutados por los últimos dos gobiernos del FMLN, pero no logran tener avances significativos en la reducción de los niveles de criminalidad. En el país la violencia también se convirtió en un negocio, en el periodo de post-guerra surgieron las ventas de armas, los cuerpos privados de seguridad que suman más de 30,000 policías privados en todo el territorio, la venta de accesorios de seguridad, la venta de ataúdes y el papel de los medios de comunicación que manejan su agenda política estimulando el miedo en la población e incentivando procesos de desestabilización contra el gobierno.

La violencia que vivimos es estimulada por los grupos de poder económico y retomada dentro de la agenda electoral como mecanismo de desgaste. Como en los años del conflicto civil los pobres siguen pagando el costo más alto, tanto a nivel material como humano. Frecuentemente la población emigra hacia otros lugares tanto a nivel interno como externo, huyendo de las amenazas a muerte, la extorsión o llamada renta que se ejecuta mediante una llamada telefónica donde le imponen cierta cantidad de dinero a cambio de su vida.

En este contexto es válido señalar el poco funcionamiento que tienen algunas instituciones de la sociedad como: la deficiencia del Sistema Judicial en administrar justicia; la familia que según la Constitución de la Republica es la parte fundamental de la sociedad, pero lo que encontramos son familias desintegradas producto de la migración principalmente a Estados Unidos en la búsqueda de mejores condiciones de vida, con violencia intrafamiliar, con escasos ingresos, con poco acceso a la educación superior; y las iglesias que aparte de ser un negocio se encuentran muy cuestionadas por procesos de corrupción y pedofilia.

7 Medidas Extraordinarias Fortalecerán el Plan El Salvador Seguro: Presidente Salvador Sánchez Ceren. Disponible en <http://www.presidencia.gob.sv/medidas-extraordinarias-fortaleceran-el-plan-el-salvador-seguro-presidente-sanchez-ceren/>, consultado 2/05/2016. Fecha de Consulta: 04/04/2016.



Le problema de la violencia necesita una salida multisectorial, pero esta alternativa se ve lejos, por los intereses políticos que están en juego y por la falta de capacidad de las instituciones del Estado de proponer medidas viables que garanticen mejorar las condiciones de vida de la población.

Referencias

BENÍTEZ MANAUT, R. (1989). La Teoría Militar y la Guerra Civil en El Salvador. UCA editores, San Salvador.

NIEVAS F, HEINRICH M y SALAZAR PÉREZ R. (2014). Militarismo y Violencia y Narcotráfico: La Agenda Oculta en América Latina. Ediciones Insumisos Latinoamericanos.

QUINTANILLA, N. J. (2010). El Salvador: Militarización de la Seguridad Pública y Combate Delincuencias: 2009-2010. Ponencia presentada en el décimo Congreso Centroamericano de Sociología, Costa Rica, 2010.

